

El PRC afirma que la de Cantur ha sido “la comisión de la mentira, la calumnia y la inmoralidad” y exige la dimisión de Diego como “incitador”

Pérez Tezanos considera probado que no existió “corrupción” en el anterior Gobierno y pide a la Fiscalía que investigue la actuación del actual en el Racing

Santander, 5 de junio de 2013

El diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos ha asegurado hoy que la de Cantur ha sido “la comisión de la falsedad, de la mentira, la calumnia y la inmoralidad” y ha exigido la dimisión del “incitador”, en alusión al presidente regional, Ignacio Diego. “Pedimos dimisiones por decencia política y no nos referimos a los mensajeros, sino al incitador que ha alentado la indecencia, la difamación, el atentado contra el honor personal y la perversión en el ejercicio de la política”.

Pérez Tezanos ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada Rosa Valdés, con quien ha compartido la representación del PRC, para presentar sus conclusiones una vez concluidos los trabajos de la comisión de investigación, en los cuales no se han hallado “indicios de corrupción”, ni de “financiación ilegal” o “lucro personal” por parte del anterior Gobierno de Cantabria, como pretendía el Grupo Popular.

El parlamentario ha censurado el comportamiento de los populares y, especialmente, del presidente regional, a quien ha reprochado “no tener el valor de capitanear” las acusaciones contra el anterior Ejecutivo. “Ha lanzado mensajeros por miedo a que se escape una bofetada, mejor que la lleve otro”, ha apostillado.

Ha opinado además que Diego optó por la investigación en el Parlamento para aprovechar la inviolabilidad y el aforamiento de los diputados, lo cual les ha permitido “mentir impunemente y lanzar falsedades y calumnias contra todos sus adversarios políticos”, provocando “una perversión de la vida política” que a su juicio “debería ser delito, porque no se puede consentir que siga creciendo, como ocurre últimamente, la vía de la difamación”.

Pérez Tezanos ha desgranado las conclusiones regionalistas en los distintos ámbitos investigados por la comisión, entre ellos el procedimiento seguido para la construcción de la Casa de los Gorilas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, por el que el PP ha presentado una querrela contra el ex consejero Javier López Marcano, a través de Cantur. En este sentido, ha señalado que en la investigación realizada no se han hallado “los indicios de corrupción que se buscaban”, ni “delito alguno en el proceder de los profesionales y las empresas que han actuado”.

POR CANTABRIA, LOS PRIMEROS

GABINETE DE PRENSA

Por lo que respecta a la venta de las acciones del Racing, no sólo ha subrayado que nadie del Gobierno PRC-PSOE “actuó de mala fe, ni ganó dinero”, sino que también ha pedido que la Fiscalía investigue la actuación del Ejecutivo que preside Ignacio Diego, por su “dejación y falta de celo hacia el club, para dejarle morir y corromper todo el proceso, con el único fin de echar la culpa a los anteriores”.

Además, después de que los portavoces del PP calificaran ayer al empresario indio Alí Sayed como “estafador” y aunque ha dejado claro que no es precisamente “fan” de esta persona, ha recordado su desembolso de alrededor de cuatro millones de euros. “Ya que hablan de estafa, que me digan quién ha sido, que los fiscales busquen entre el resto de implicados”, ha recalcado.

El diputado regionalista ha destacado por otra parte que la investigación en materia de proveedores también ha dejado claro que no existieron “ni vías de financiación política, ni vías de lucro personal”, como intentaba demostrar el Partido Popular, en cuyas filas por el contrario “si se está demostrando financiación a través de casos como Gürtel y Bárcenas”.

A este respecto, ha puesto en valor las declaraciones del jefe de compras y del director económico de Cantur, ya que ambos aseguraron que “jamás” recibieron presiones ni para contratar con profesionales y empresas determinadas, ni para beneficiar a nadie a la hora de efectuar los pagos.

Finalmente, ha aludido a la auditoría de la empresa pública realizada a instancias del Gabinete de Ignacio Diego por una empresa riojana y ha pedido a la Fiscalía que investigue “por qué nadie la ha firmado y por qué ni siquiera despacharon con los afectados”.

